

Perú (Nivel 2)

El gobierno peruano no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, aunque realiza esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró esfuerzos crecientes en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, el Perú se mantuvo en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron la condena de un mayor número de tratantes, incluyendo la condena y la sentencia rigurosa de un tratante sexual extranjero en un caso grave. El gobierno también aumentó la identificación del número de víctimas y abrió un nuevo refugio para víctimas de trata. En respuesta a la continua afluencia de un gran número de migrantes venezolanos, muchos de los cuales eran vulnerables a la trata, las autoridades identificaron 102 víctimas de trata de nacionalidad venezolana y brindaron servicios de protección a corto plazo a todos los niños víctimas y algunos adultos. El gobierno incrementó los esfuerzos para hacer cumplir las leyes contra la minería ilegal, que alimenta la demanda de trata sexual y laboral en el Perú, pero no siempre aplicó procedimientos centrados en la víctima en las operaciones contra la minería ilegal. El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Disminuyó su presupuesto contra la trata de personas y muchos ministerios informaron que carecen de fondos suficientes para cumplir con sus mandatos contra la trata, en particular la protección de las víctimas. La mala coordinación interinstitucional siguió obstaculizando la identificación y asistencia de las víctimas, por lo que la mayoría no recibió la atención adecuada. La complicidad de algunos funcionarios del gobierno socavó los esfuerzos para combatir la trata, pero el gobierno no informó ninguna nueva investigación de los funcionarios cómplices.

RECOMENDACIONES POR ORDEN DE PRIORIDAD:

Aumentar la financiación y el acceso a servicios especializados e integrales, que incluyen asistencia legal, médica, psicosocial, en refugios, en gestión de casos, educativa o profesional y de reintegración, para todas las víctimas, incluidas los adultos, los niños LGBTI y las víctimas de trata. • Aumentar la cooperación entre los funcionarios de justicia penal y entre esos funcionarios y los proveedores de servicios y aumentar los esfuerzos para emplear procedimientos centrados en la víctima e informados sobre el trauma en las operaciones policiales, investigaciones y procedimientos de justicia penal. • Aumentar los esfuerzos para hacer que los servicios a las víctimas estén disponibles inmediatamente después de las operaciones policiales, y priorizar la detección efectiva de las víctimas y el traslado

inmediato de las víctimas a lugares seguros. • Investigar y denunciar la corrupción relacionada con la trata y la complicidad de las autoridades, así como condenar y castigar a los funcionarios cómplices por estos delitos. • Aumentar los esfuerzos para denunciar los delitos de trata sexual y laboral, condenar y castigar a los tratantes y aplicar sentencias adecuadas a los tratantes condenados que deberían incluir penas de prisión significativas. • Elaborar, aplicar plenamente y capacitar a los funcionarios sobre protocolos gubernamentales para orientar la identificación proactiva y la remisión de presuntas víctimas de explotación sexual y laboral, incluida la detección de indicadores de trata entre grupos vulnerables y con un enfoque en la trata sin conflictos de delitos relacionados. • Dejar de retener a las víctimas en las estaciones de policía, especialmente a los niños. • Aumentar los esfuerzos para detectar sistemáticamente los indicadores de tráfico entre los migrantes venezolanos y continuar identificando a las posibles víctimas y brindándoles servicios de protección. • Modificar la ley contra la trata de personas de modo que las penas para la trata sexual sean proporcionales a las penas para otros delitos graves. • Fortalecer e institucionalizar la capacitación sobre la aplicación de leyes contra la trata de personas y el uso de procedimientos centrados en las víctimas para la policía, los fiscales y los jueces, así como aplicar políticas para reducir la rotación de personal entre la policía especializada. • Mejorar los esfuerzos para recopilar e informar datos completos, armonizados y desagregados sobre los esfuerzos contra la trata. • Dedicar fondos suficientes en los presupuestos de los ministerios y gobiernos regionales para llevar a cabo responsabilidades de la lucha contra la trata y aumentar los recursos generales para combatirla. • Hacer cumplir las leyes contra los delitos que facilitan la trata, como la contratación fraudulenta de empleos, la minería y la tala ilegales y los actos de falsificación.

Procesamiento judicial

El gobierno incrementó los esfuerzos de procesamiento judicial. El artículo 153 del código penal tipifica como delito la explotación sexual y la explotación laboral y establece penas de ocho a 15 años de prisión por delitos que involucren víctimas adultas, 12 a 20 años de prisión por delitos que involucren víctimas entre 14 y 18 años, y un mínimo de 25 años de prisión por delitos que involucren víctimas menores de 14 años. Estas penas eran suficientemente severas; sin embargo, con respecto a la trata sexual, no eran proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. La ley definía la trata en términos generales para incluir todas las formas de explotación laboral y adopción ilegal o venta de niños sin el propósito de explotación. En 2017, el Decreto Legislativo N° 1232 modificó el

código penal para incluir delitos separados por "trabajo forzado", "explotación sexual" y "esclavitud y otras formas de explotación" que conllevaban penas de seis a 12 años de prisión, de 10 a 15 años. años de prisión y de 10 a 15 años de prisión, respectivamente. Estos artículos penalizaban ciertas formas de trata sexual y laboral y se superponían significativamente con los delitos de trata prohibidos en el artículo 153. El gobierno continuó introduciendo el Nuevo Código Procesal Penal, implementándolo en 31 de los 34 distritos judiciales. El nuevo código penal no exigía que las víctimas de trata presenten una denuncia para que el gobierno procesara a un presunto tratante.

La policía realizó un mayor número de operaciones que incluyeron actividades contra la trata y arrestó a 423 presuntos tratantes, en comparación con los 410 presuntos tratantes arrestados en 2017. Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio Público participaron en 201 operaciones contra la trata, en comparación con las 122 en 2017. Los fiscales también detuvieron a 142 sospechosos y abrieron 800 investigaciones; en 2017, investigaron a 228 sospechosos. Varias operaciones involucraron redadas grandes y coordinadas en lugares remotos. A veces, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no empleaban procedimientos centrados en la víctima, en particular durante las redadas en lugares donde se practicaba el sexo con fines comerciales. El gobierno informó haber condenado a 46 tratantes en 2018, un aumento de los 33 tratantes condenados en 2017. El gobierno no notificó datos completos de procesamiento o de sentencia para los tratantes condenados en 2017 o 2018. En mayo de 2018, la policía y los fiscales llevaron a cabo una redada en la ciudad minera de La Pampa, en Madre de Dios, que llevó a la detención de siete presuntos tratantes. En febrero de 2019, el gobierno lanzó una operación a gran escala para expulsar a los mineros ilegales en La Pampa; entre los más de 1500 funcionarios del sector de justicia penal se encontraban 20 policías y 10 fiscales de unidades contra la trata. Los funcionarios detuvieron a ocho presuntos tratantes durante la operación. El gobierno no informó sobre los avances en el procesamiento de 2017 de un caso en el que un incendio industrial en un taller de falsificación ilegal causó la muerte de dos trabajadores que fueron encerrados bajo llave por sus empleadores; un sospechoso permaneció en prisión preventiva y otro estuvo bajo arresto domiciliario en espera de juicio. En marzo de 2019, el gobierno condenó y sentenció a 27 años de prisión a un ciudadano estadounidense por dirigir una operación de trata sexual que explotaba a mujeres y niñas peruanas en el turismo sexual.

Si bien varios ministerios recopilaban datos para hacer un seguimiento de sus esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata y de protección a las víctimas, el gobierno carecía de un sistema coordinado de recopilación de datos, lo que dificultaba a las autoridades la verificación de las estadísticas, la evaluación de los esfuerzos y la respuesta a las tendencias. Con el apoyo de un donante extranjero, el gobierno desarrolló un sistema de recopilación de datos para monitorear la implementación de su plan nacional, pero no había comenzado a utilizar el sistema al cierre del período del informe. La superposición del marco legal peruano complicó aún más los esfuerzos de recopilación de datos, ya que las autoridades a menudo denuncian los casos de trata de delitos similares, como la explotación sexual. Algunos funcionarios aplicaron una definición más limitada de la trata que la que se define en la legislación peruana, por ejemplo, considerar el reclutamiento como un elemento esencial de un delito de trata.

El gobierno aumentó en más del doble el número de policías en su unidad contra la trata de personas, totalizando a 398, y mantuvo ocho oficinas especializadas de fiscales regionales contra la trata de personas con 35 fiscales. Sin embargo, no implementó una resolución ministerial que requería que la policía contra la trata permaneciera en sus unidades durante al menos dos años, y la alta rotación de la policía socavó los esfuerzos para desarrollar la capacidad de esta unidad para combatir la trata. Sólo los casos imputados en virtud del artículo 153 del código penal pueden asignarse a fiscales especializados; los casos de trata de personas acusados en virtud de otros estatutos, como el trabajo forzado o la explotación sexual, se remitieron a fiscales generales, y los observadores locales informaron que esos casos a menudo no avanzaban. Los jueces no recibieron una capacitación adecuada en materia de trata de personas. Los funcionarios informaron que los jueces a menudo reducían los cargos de trata sexual a delitos menores; exigían pruebas de fuerza, fraude o coerción por delitos de trata sexual infantil; o ignoraban las edades de las víctimas y no aplicaban las disposiciones penales pertinentes aplicables en casos de trata infantil. Las ONG y los funcionarios gubernamentales informaron que la falta de comunicación y la desconfianza entre la policía y los fiscales tanto a nivel nacional como regional obstaculizaron gravemente los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata. El ministerio público brindó más de 25 sesiones de capacitación a fiscales y policías, y el gobierno se asoció con ONG y organizaciones internacionales para brindar capacitación a funcionarios adicionales sobre la trata. El gobierno informó que cooperó con el gobierno de Brasil en una investigación de trata. Perú firmó un

nuevo acuerdo bilateral con España para combatir la trata y mantuvo acuerdos similares con Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina.

Las ONG y los funcionarios gubernamentales informaron que la complicidad de las autoridades en los delitos de trata y la corrupción generalizada en los sistemas judiciales y de aplicación de la legislación peruana obstaculizaron gravemente los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata. Algunos jueces y fiscales pueden haber aceptado sobornos para rebajar los cargos de tráfico a delitos menores. La participación de algunos funcionarios en la industria minera planteó un conflicto de intereses que impidió las acciones policiales contra el tráfico en las zonas mineras. Los funcionarios gubernamentales y las ONG informaron que algunos agentes de policía, incluidos miembros de las unidades especializadas contra la trata, aceptaron sobornos de los traficantes para evitar redadas, cerrar investigaciones o reducir los cargos. En noviembre de 2018, las autoridades arrestaron a un ex general de policía por presuntos delitos de trata relacionados con una red de adopción ilegal; no estaba claro si esos delitos equivalían a la trata en virtud del derecho internacional. El gobierno no notificó ninguna otra investigación, procesamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata. Al parecer, las autoridades abandonaron una investigación llevada a cabo un año atrás contra un ex miembro del Congreso por presunto manejo de un hotel en el que se realizaba la trata sexual de menores.

PROTECCIÓN

El gobierno incrementó los esfuerzos para identificar y proteger a las víctimas de trata, pero la protección general de las víctimas siguió siendo débil. La legislación peruana exigía que los ministerios de educación, salud, mujeres y poblaciones vulnerables, transporte y comunicaciones, y trabajo identificaran proactivamente y derivaran apropiadamente a las víctimas sospechosas entre las poblaciones de alto riesgo a las que sirven. Sin embargo, el gobierno no informó datos completos sobre el número de víctimas identificadas y derivadas por estos ministerios durante el período del informe. La policía informó haber identificado 1600 presuntas víctimas en 2018, incluidas 287 niños y 1313 adultos, en comparación con las 1229 presuntas víctimas identificadas en 2017. El ministerio público reportó 882 presuntas víctimas en 2018; de ellas, 738 eran mujeres y 144 hombres, y al menos 374 eran niños. No estaba claro hasta qué punto las estadísticas de la policía y los fiscales se superponían. Las autoridades identificaron 235 víctimas extranjeras, un aumento de 59 en 2017; casi todas eran mujeres y aproximadamente la mitad, 102,

eran venezolanas. La policía y los fiscales identificaron a 96 presuntas víctimas de trata en La Pampa durante la redada de mayo de 2018 y el gobierno informó que identificó a 51 víctimas de trata en La Pampa en febrero de 2019, aunque algunos informes cuestionaron esta afirmación. Los inspectores laborales coordinaron las operaciones con la policía y además identificaron a ocho presuntas víctimas de explotación en el trabajo doméstico y el ministerio de transportes participó en operaciones conjuntas con las autoridades policiales que dieron como resultado la identificación de 95 mujeres víctimas. El gobierno carecía de procedimientos estandarizados para que los funcionarios examinaran los indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables a las que asistían y derivaran a las presuntas víctimas a los servicios. Los observadores locales informaron que algunos funcionarios se mostraron reacios a identificar y derivar a las presuntas víctimas de trata debido al temor de represalias de los tratantes. La policía y los fiscales tuvieron dificultades para identificar los indicadores de trata de mujeres en la prostitución, y los funcionarios tuvieron dificultades para distinguir entre la trata y los delitos similares, incluida la explotación sexual y el trabajo forzado.

La ley contra la trata de personas (Ley 28950) requería que el gobierno protegiera a las víctimas mediante el alojamiento temporal, el transporte, atención médica y psicológica, asistencia legal y asistencia para la reintegración; pero el gobierno no cumplió totalmente este mandato. Las autoridades tenían protocolos interministeriales e intraministeriales para brindar protección a las víctimas de trata, pero los aplican de forma desigual debido a la insuficiencia de recursos y a la deficiente coordinación entre organismos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) era responsable de coordinar y brindar asistencia a las víctimas en colaboración con los gobiernos regionales, aunque la confusión sobre si el gobierno nacional o regional era en última instancia responsable de la provisión de servicios a veces dificultaba la asistencia a las víctimas. El gobierno comenzó a aplicar disposiciones de un decreto de 2017 que estableció nuevas unidades del MIMP responsables de la protección de los niños vulnerables, incluidas las víctimas de trata y desarrolló un protocolo para guiar a estas unidades en la protección de las víctimas de trata infantil.

El MIMP brindó servicios a 128 víctimas de trata infantil, incluidas 112 niñas y 16 niños. El programa del ministerio público para víctimas y testigos brindó servicios a corto plazo inmediatamente después de las operaciones de aplicación de la ley a 684 víctimas de trata en 2018, un aumento de 521 víctimas asistidas en 2017. El gobierno continuó operando dos refugios exclusivamente para víctimas de trata y

amplió la capacidad de uno de estos refugios; estas instalaciones atendieron a 71 víctimas en 2018. En febrero de 2019, el gobierno abrió un tercer refugio para niñas víctimas de trata de personas, en una propiedad incautada a un lavador de dinero condenado durante el período de un informe anterior y restauró esta instalación con el apoyo de un donante extranjero. En conjunto, los tres refugios podían alojar cómodamente a 60 víctimas de trata a la vez, aunque a menudo estaban por encima de su capacidad. El gobierno operaba 48 centros residenciales para niños, estos prestaban asistencia a un número desconocido de víctimas de trata infantil durante el año; el personal carecía de los conocimientos especializados y los recursos necesarios para brindar servicios de protección adecuados a las víctimas de trata. El MIMP operaba 295 centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, un aumento de los 222 en 2017; estos centros no residenciales proporcionaban servicios legales, psicológicos y sociales a un número desconocido de mujeres víctimas de trata sexual. Muchas organizaciones de la sociedad civil manejaban refugios o brindaban otros servicios para las víctimas sin el apoyo del gobierno, aunque pocas ofrecieron servicios específicos para la trata. El MIMP clasificó a los niños según los cargos presentados en sus casos legales; debido a que el MIMP calificó a muchas víctimas de trata sexual infantil como víctimas de explotación sexual, no pudieron acceder a servicios especializados para víctimas de trata. Hubo instalaciones de refugio limitadas para mujeres adultas y víctimas de trata laboral, mas no hubo instalaciones que pudieran alojar a víctimas adultas masculinas. No hubo servicios especializados para víctimas LGBTI; en particular, las víctimas transgénero no recibieron atención adecuada. Las autoridades brindaron servicios mínimos, si los había, para reintegrar a las víctimas en las comunidades. El gobierno elaboró directrices para proporcionar a las víctimas planes individuales de reintegración, pero no las finalizó ni las implementó antes del cierre del período del informe. El Ministerio del Interior organizó 15 talleres a más de 500 proveedores de servicios sobre protocolos de atención y protección a las víctimas.

Los funcionarios de justicia penal a menudo no emplearon un enfoque centrado en la víctima y, en ocasiones, llevaron a cabo operaciones contra la trata de personas sin los recursos adecuados, como lugares seguros para detectar posibles víctimas y brindar atención inmediata. Los observadores locales informaron que el MIMP no participó en la operación de febrero de 2019 en La Pampa, y los oficiales de policía no trasladaron a las víctimas a un lugar seguro. Los problemas de coordinación entre los ministerios a menudo significaban que los servicios para las víctimas no

estaban disponibles inmediatamente después de las operaciones policiales. Algunos fiscales alojaron temporalmente a víctimas de trata infantil en espacios de refugio improvisados dentro de sus edificios de oficinas. La falta de incentivos para participar en investigaciones y procesamientos y el acceso limitado a servicios especializados, como el apoyo para la subsistencia, llevaron a muchas víctimas adultas a rechazar los servicios del gobierno. Los funcionarios mencionaron la falta de servicios de protección adecuados como un impedimento clave para su capacidad para combatir eficazmente la trata en el Perú; la mayoría de las víctimas no recibieron suficientes servicios de protección, dejándolas en alto riesgo de ser nuevamente traficadas.

La ley exigía que el gobierno proporcionara representación legal a las víctimas, salvaguardara sus derechos legales y las guiara a través del sistema legal. El Ministerio de Justicia informó que proporcionó asistencia legal a 361 víctimas de trata en 2018, una disminución de las 394 víctimas en 2017. El gobierno no informó si alguna víctima recibió una indemnización en 2018. Las víctimas extranjeras podían optar a la residencia temporal y permanente en virtud de la legislación peruana sobre refugiados, pero el gobierno no informó sobre los servicios que prestaba a las víctimas extranjeras durante el año. El gobierno informó sobre la coordinación con las ONG para repatriar a algunas víctimas extranjeras explotadas en el Perú, pero no especificó sus contribuciones ni el número de víctimas, ni tampoco informó sobre la ayuda prestada para la repatriación de las víctimas peruanas explotadas en el extranjero. Los procedimientos inadecuados de identificación de víctimas pudieron haber llevado a las autoridades a arrestar, detener o penalizar a las víctimas de trata por actos ilegales que los traficantes les obligaron a cometer. En ocasiones, las autoridades colocaban a las víctimas infantiles en las estaciones de policía junto con los menores detenidos por delitos, enfrentando condiciones similares a la detención mientras esperaban ser trasladados a un refugio.

PREVENCIÓN

El gobierno mantuvo los esfuerzos de prevención. La comisión interinstitucional, en la que también participan ONG, se reunió periódicamente y coordinó la aplicación del plan nacional contra la trata de personas, en vigor hasta 2021. A diferencia de años anteriores, el gobierno no elaboró el informe anual requerido al Congreso sobre los esfuerzos del gobierno contra la trata de personas. El gobierno nacional brindó capacitación y asistencia técnica a los veinticuatro gobiernos

regionales del Perú, todos los cuales mantuvieron grupos de trabajo que variaron en capacidad y efectividad para abordar la trata a nivel local. Ocho gobiernos regionales aprobaron planes regionales nuevos o fortalecidos contra la trata. El gobierno dedicó aproximadamente ocho millones de soles (\$ 2.37 millones) a actividades contra la trata en 2018, una disminución de los 11 millones de soles (\$ 3.26 millones) en 2017, aunque no pudo cuantificar sus gastos totales, ya que muchas víctimas recibieron asistencia que no estaba especializada para la trata y varios ministerios que llevaron a cabo actividades contra la trata no contaban con un presupuesto de partida para la trata de personas. Los funcionarios notaron que la falta de fondos adecuados obstaculizaba la capacidad de los ministerios y gobiernos regionales para cumplir con sus deberes como se describe en el plan nacional, especialmente los esfuerzos para la protección de víctimas. El gobierno tenía una comisión separada, un protocolo interministerial y un plan para combatir el trabajo forzado y el trabajo infantil. El gobierno implementó un plan para aumentar la protección de los trabajadores domésticos, que incluía una mayor supervisión de las agencias de empleo y mejores respuestas al presunto trabajo forzado o infantil, y los inspectores laborales remitieron a la policía ocho presuntos casos de explotación en el trabajo doméstico durante el año. El gobierno abrió dos nuevas oficinas regionales de inspección laboral en 2018, aumentó el número de inspectores laborales en todo el país de 480 a 636, y creó unidades de inspección de 11 miembros en cada oficina regional que están especializadas en trabajo forzado e infantil. En respuesta a la afluencia de más de 700 000 migrantes venezolanos que llegaron al Perú desde 2016, el gobierno continuó emitiendo permisos de residencia permanente que les permitieron trabajar legalmente en el país, reduciendo su vulnerabilidad a la trata; emitió aproximadamente 300 000 permisos durante el año. El gobierno lanzó una radionovela en quechua para advertir a las poblaciones indígenas sobre los riesgos de la trata de personas. Varios ministerios realizaron esfuerzos adicionales de sensibilización, a menudo en asociación con organizaciones internacionales y ONG y con fondos de donantes extranjeros. Algunos de estos esfuerzos se centraron en prevenir el turismo sexual infantil y proporcionar información para denunciar sospechas de abusos. El gobierno incrementó los esfuerzos para hacer cumplir las leyes contra la minería ilegal, que alimenta la demanda de la trata sexual y laboral. El gobierno no informó sobre los esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales con fines comerciales. El gobierno hizo esfuerzos para reducir la demanda de trabajo forzado; en febrero de 2019, se arrestó a dos reclutadores laborales por reclutamiento fraudulento que facilitó la trata de víctimas peruanas en Brasil.

PERFIL DE LA TRATA DE PERSONAS

Según se informó en los últimos cinco años, los tratantes explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Perú, y también explotan a las víctimas nacionales en el extranjero. Los peruanos de origen indígena son particularmente vulnerables a la trata. Los tratantes explotan a mujeres y niñas peruanas y extranjeras y en menor medida a niños en la trata sexual dentro del país; los tratantes a menudo reclutan víctimas a través de ofertas de empleo falsas y, cada vez más, en las plataformas de redes sociales. Los tratantes explotan a mujeres y niños peruanos en la trata sexual en otros países, particularmente en América del Sur, y explotan a mujeres y niñas de países vecinos en Perú. Los peruanos LGBTI, especialmente las mujeres y niñas transgénero, son vulnerables a la trata sexual. Las comunidades ubicadas cerca de las operaciones mineras ilegales a menudo están aisladas y carecen de una presencia gubernamental permanente, lo que aumenta la probabilidad de actividad ilícita, incluido la trata sexual y laboral. La alta demanda de sexo comercial en estas ciudades aumenta los incentivos para que los tratantes traigan mujeres y niñas de diversas regiones del Perú, incluyendo migrantes venezolanas o bolivianas. Las mujeres y niñas explotadas en la trata sexual cerca de las comunidades mineras a menudo están endeudadas debido al costo del transporte y no pueden salir debido a la lejanía de los campamentos y la complicidad de los mineros en su explotación. Turistas de Estados Unidos y Europa pagan por tener relaciones sexuales con niños víctimas de la trata en zonas como Cusco, Lima y la Amazonía peruana. En la región de Loreto, los grupos delictivos facilitan el transporte de turistas extranjeros en barco a lugares remotos donde los tratantes explotan a mujeres y niños en la trata sexual en lugares situados en el río Amazonas.

Los tratantes explotan a hombres, mujeres y niños peruanos y extranjeros en trabajos forzados en el país, principalmente en la minería de oro ilegal y legal y servicios relacionados, la tala, la agricultura, la fabricación de ladrillos, las fábricas no registradas, las actividades de falsificación, la mendicidad callejera organizada y el servicio doméstico. Los tratantes someten a los peruanos a trabajos forzados en minas de oro artesanales y en campamentos improvisados cercanos que prestan servicios a los mineros; los tratantes obligan a las víctimas mediante el reclutamiento engañoso, la coacción por deuda, la restricción de la libertad de movimiento, la retención o el impago de sueldos, y las amenazas y el uso de la violencia física. Los tratantes someten a los niños a trabajos forzados en la mendicidad, la venta ambulante, el trabajo doméstico, la producción y el transporte de cocaína, entre otras actividades delictivas. La organización narcoterrorista

Sendero Luminoso recluta niños utilizando la fuerza y la coerción para servir como combatientes o guardias, y utiliza la fuerza y la coerción para someter a niños y adultos a trabajos forzados en la agricultura, el cultivo o el transporte de estupefacientes ilícitos y la explotación en el trabajo doméstico, así como para llevar a cabo sus actividades terroristas. Los tratantes someten a hombres, mujeres y niños peruanos a trabajos forzados en otros países de América del Sur, Estados Unidos, entre otros. Desde 2016, más de 700 000 venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en su país han ingresado al Perú; los tratantes someten a adultos y niños venezolanos a la trata sexual y laboral en ruta hacia o después de su llegada al Perú. Según se informa, los migrantes a lo largo de la frontera sur de Perú con Chile eran vulnerables a la trata sexual y laboral. Las ONG y los funcionarios gubernamentales informaron de que seguía habiendo complicidad de las autoridades en los delitos de trata y de que la corrupción generalizada en los sistemas policiales y judiciales peruanos seguía obstaculizando las actividades de lucha contra la trata.